



La consulta plantea si resulta posible conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la comunicación, a un equipo de tratamiento familiar perteneciente al Área de Igualdad y Bienestar Social de un Ayuntamiento, de las demandas que hace en sus llamadas al servicio 112 un miembro de una familia con la que dicho equipo se encuentra trabajando.

La comunicación a que se refiere la consulta constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como *“Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”*, previendo el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, que *“los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”*.

No obstante, es posible la cesión de datos personales sin consentimiento del afectado, siempre que nos encontremos ante alguna de las excepciones previstas en el número segundo del artículo 11 conforme al cual *“El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:*

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.*
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.*
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.*
- d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.*

*e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.*

*f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”*

Este precepto debe complementarse, en cuanto a la cesión de datos entre Administraciones, con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en la redacción resultante de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que dispone que “*los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos*”. Quiere ello decir que, salvo en los supuestos en que la cesión se funde en el ejercicio de unas mismas competencias, la cesión sólo resultará admisible en caso de que exista una norma con rango de Ley (incluyendo la propia Ley Orgánica 15/1999) que habilite la cesión planteada.

En lo que al servicio de emergencias 112 se refiere, esta Agencia ha venido señalando que son diversas las normas que al regular su existencia, han venido a considerar prevalente el derecho de salvaguardar la integridad de personas o bienes del afectado o de terceras personas, o el derecho a atender una necesidad vital del afectado o terceros sobre el derecho a la protección de los datos personales. Así, a título de ejemplo, con diversos fundamentos legales, se ha señalado, que tiene cabida en la Ley Orgánica 15/1999 la cesión de datos referentes a las personas que comunican la existencia de un determinado siniestro a quienes prestan su colaboración en relación con los servicios de emergencia gestionados a través de los teléfonos de urgencia 112, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando su actuación sea necesaria para resolver una situación de emergencia alertada por el propio llamante.

Por consiguiente, para que la cesión de datos a que la consulta se refiere sea conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, será preciso que se efectúe con el consentimiento del interesado o que dicha cesión encuentre su fundamento en alguno de los supuestos previstos en los artículos 11.2 y 21 de la citada Ley Orgánica, sin que en el presente caso resulte posible determinar si resulta ajustada a lo previsto en dicha norma, dada la falta de



concreción con que se formula la consulta, de la que únicamente se desprende que no se trata de una situación de emergencia.